

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Lanla*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 10 de 1874.—*Lic. Emilio Ordoz*, oficial mayor interino.

AMPARO.

Promovido ante el Juegado de Distrito de Oaxaca por José de Jesus Martínez, contra el C. Gefe político de Tlaxolula que lo condenó á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, alegando para definitiva, dice: que en el amparo promovido por José de Jesus Martínez, contra la providencia del C. Gefe político de Tlaxolula que lo condenó á la última pena por robo y asalto, y contra la resolución gubernativa que de él se hizo, por tiempo indeterminado al presidio de Veracruz en el año de 1869, surgen las cuestiones siguientes: primera: ¿está probado que Martínez sea el autor de los delitos de que se acusa? Segunda: ¿en el caso de estarlo, es aplicable la ley de 11 de Mayo de 1873? Tercera: ¿es de otorgarse el amparo que Martínez solicita contra las mencionadas providencias?

Respecto á la primera cuestion, el infrascrito cree, que no hay prueba perfecta, como la que se exige por la ley 2 tít. 14 part 3ª para condenar, por que los que declaran en contra del quejoso son cómplices, y de dos que no lo son, Marcos Arizola y Ramon Aquino, no determinan los hechos con precision, toda la vez que no dicen en qué asaltos hayan visto á Martínez; y además, el segundo es un niño de nueve años á quien por su edad ni siquiera se le recibió su declaración bajo la protesta. De esto se deduce, que la prueba constante en el proceso no merece fé jurídica conforme á las leyes 21 y 9 tít. 16 part. 3ª; y si bien es cierto que las leyes excepcionales para castigar el robo y el plagio imponen la pena de muerte, tambien lo es, que con arreglo á ellas mismas se decreta ésta, siempre que el delito fuere probado.

En cuanto á la segunda cuestion, á juicio del que suscribe es fuera de toda duda, que el C. Gefe político de Tlaxolula aplicó mal la ley de 2 de Mayo citada, puesto que juzgaba por delitos cometidos en los años 1870 y 1871. Además, y á propósito de las leyes de 18 de Mayo de 1871 y 23 de Mayo de 1872, la primera no comprende á los saltadores en poblado y la segunda los incluye, como puede verse en el párrafo tercero de esta última, excluyéndolos la de 9 de Abril de 1870. Resulta por lo mismo, que aquel funcionario aplicó indebidamente la ley de Mayo último de que se ha hecho referencia.

Por lo que toca á la tercera cuestion, el que suscribe opina: que debe resolverse en favor de Martínez, supuesto la resolución de las dos anteriores; y porque en el proceso no hay sentencia pronunciada en su contra, en virtud de la cual aparezca que fué condenado á determinado tiempo de presidio en Veracruz, sino solo una informacion que recibió la gefatura, sin darle á conocer á los testigos, sin carearlo con ellos; debiendo tenerse en cuenta, que dichos testigos declararon en términos muy ge-

nerales sobre la mala conducta del quejoso, pues no especifican los hechos que la constituyen con la claridad y precisión debidas. Por consiguiente, la providencia dictada en 1869 por la autoridad gubernativa, carece de valor legal.

También debo hacer notar, que en mi humilde concepto, las leyes que han hecho extensiva la pena de muerte á los casos no expresados en el artículo 23 de la carta fundamental de la República, son anticonstitucionales, puesto que según el 29 de la misma, aunque puede suspenderse las garantías que otorga, exceptúa las que aseguran la vida del hombre, y puesto que el 126 es la ley suprema de toda la unión.

Fundado en todo lo expuesto, en el artículo 19 fracción 1ª y 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, este Ministerio pide á V. se sirva otorgar á José de Jesus Martinez el amparo que de la justicia federal solicita, por haberse vulnerado en su persona las garantías que el pacto federal concede en sus artículos 14 y 20, con las providencias dictadas de que se ha hecho referencia.—Oaxaca de Juarez, Noviembre 14 de 1873.

Es copia fielmente sacada de su original, que obra en el juicio respectivo á que me remito. Oaxaca de Juarez, Noviembre 14 de 1873.—*José María Ballesteros.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Oaxaca de Juarez, Noviembre 20 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por José de Jesus Martinez, originario del pueblo de San Miguel Tlalixtao, de este distrito del centro, contra la sentencia pronunciada en 18 de Mayo último por el Presidente municipal de la Villa de Tlaxcolula C. Antonio Aquino, encargado por ministerio de la ley de la Jefatura política de ese distrito, en el juicio que le siguió carceciendo de competencia, por suponerlo responsable de varios delitos de robo en po-

blado, y en virtud de cuya sentencia lo condenó á la pena ordinaria, sin estar justificado siquiera en forma ni el cuerpo de esos delitos, ni mucho menos la culpabilidad que se le atribuye según refiere por menor, y contra la simple providencia dictada en el año de 1869 por el Gobierno del Estado, que lo mandó sin las formalidades legales tampoco, al presidio de Veracruz, por tiempo indefinido, por creerlo sospechoso de ladrón (fojas 33 vuelta y 34), según así mismo expresa, y con cuyas providencias asegura haberse violado en su persona, respectivamente, las garantías que le conceden los artículos 14, 16, 19, 20, 23 y 29 de la Constitución federal de 5 de Febrero de 1857; visto el informe de la autoridad ejecutora de los actos reclamados y las constancias en que lo apeya, así como las acumuladas de 1869, pedidas por el Juzgado 1º de esta Capital en 3 de Abril último (fojas 31 vuelta) al personal respectivo del Gobierno de aquella época, para el mejor esclarecimiento de la fuga y clase de reo consignado á dicho juzgado; la prueba documental rendida por las partes, y alegatos aducidos al tiempo de la vista.

Considerando; primero: que en efecto, se han violado las garantías expresadas, pues ni está justificado en toda forma legal en las averiguaciones el cuerpo de los delitos de que se le hizo cargo, á fojas 23 vuelta, 24 y 25, que se dicen respectivamente intentados cometer y cometidos en poblado el 3 de Febrero de 1870 en la Villa de Tlaxcolula, 20 de Abril del mismo año en el pueblo de Matatlan y 1º de Setiembre de 1871 en el pueblo de Güila, ni por último, probado el fundamento de su consignación en 19 de Junio de 1869, por sospechoso de ladrón (fojas 33 vuelta), ni el presunto reo aparece confeso ni convicto jurídicamente de esos cargos tan vagos como ilegales, que no le resultan probados de las actuaciones consiguientes que se formaron y tuvieron á la vista para dar el fallo y dictar la providencia reclamada, siendo notables tan irregu-

lares procedimientos en pleno órden constitucional.

Segundo: que se han infringido aún las mismas leyes espeditas contra los salteadores y plagiarios en los años de 1869, 1870 y 1871, y que no es aplicable la de 2 de Mayo de 1873 por ser posterior.

Tercero: que aunque por esas leyes primeras se suspenden constitucionalmente algunas garantías para los salteadores y plagiarios, en esa suspension no se comprende la concedida por el artículo 14 de la carta fundamental de la República, que es una de las mas importantes para todo hombre, y fué igualmente violada por la espresada sentencia de 18 de Mayo último.

Cuarto: que en consecuencia, procede el recurso intentado por el quejoso, y cuanto mas tener presente resulta de lo actuado y ver convino. La justicia federal, de conformidad con lo pedido por el Ministerio público en favor del interesado, en su alegato de 14 del corriente, constante á fojas 38, que se dá aquí por espresa, y con fundamento de los artículos 1º, 14, 23, 29, 101, 102 y 126 de la Constitucion de 5 de Febrero de 1857, y en los artículos 1º fraccion 1ª y 28 de la ley de 20 de Enero de 1869, decreta: que ampara y protege al acusado José de Jesus Martinez contra las providencias que motivan este recurso, debiendo por consiguiente ser consignado al Juez competente con arreglo á derecho, para los efectos que son consiguientes, mandando se haga saber á las partes, se publique por los periódicos "Diario Oficial" y "Semanario Judicial de la Federación," y se eleven estas actuaciones para su revision á la Corte Suprema de Justicia. El C. Juez 1º suplente de Distrito, definitivamente juzgando, así lo sentenció, mandó y firmó. Doy fé.—*Juan Ignacio Fagoaga*.—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juarez, Noviembre 27 de 1873. —*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

Mexico, Diciembre 22 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por José de Jesus Martinez, ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca contra los actos del C. Gefe político del Distrito de Tlaxolula, que lo condenó á la última pena con arreglo á la ley de 2 de Mayo del presente año; visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; lo alegado por el promovente; lo pedido por el C. Promotor fiscal; las pruebas rendidas; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y considerando: que los delitos de que se acusa á Martinez y por los que lo juzgó el Gefe político de Tlaxolula, aparecen cometidos en los años de 1870 y 1871, y la ley que se aplicó al quejoso es la de 2 de Mayo del presente año: que aplicar una ley posterior á hechos anteriores, es darle á esta efecto retroactivo, contrariando lo determinado por el artículo 14 del Pacto federal: que no siendo aplicable al caso de que se trata la presente ley, y aplicándose la del año de 1870, esta no comprendia los asaltos en poblado, presumiéndose que los consideraba como delitos del órden comun, sujetos al conocimiento de la jurisdiccion ordinaria.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Oaxaca en 20 de Noviembre próximo pasado, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á José de Jesus Martinez contra los actos del C. Gefe político de Tlaxolula que motivan este recurso, debiendo ser consignado al juez competente con arreglo á derecho, para los efectos consiguientes.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Artaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzmán.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 12 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, contra Apolonio Barriga, por rebelion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado las diligencias de esta causa seguida contra Apolonio Barriga, por el delito de rebelion, y si bien es cierto el hecho principal, no está conforme en la apreciacion de otros que se refieren en el pedimento de las fojas 23 y 24, ni mucho menos en la aplicacion del Código penal, pues si tuviera alguna, sería respecto de los hechos anteriores á su publicacion.

Pero escusado parece entrar en todo pormenor cuando de las declaraciones de la foja 15, relativas al otro, sí del interrogatorio de la 14 vuelta, aparece que Barriga estuvo enfermo en un punto remoto de tierra caliente, durante el tiempo que concedió á los rebeldes la ley de amnistia, para que se presentaran á las autoridades legítimas. Así pues, esta imposibilidad física que fué la causa de que aquel no se presentara oportunamente, no debe en manera alguna ceder en su perjuicio. El testigo caracterizado que declara á la foja 16 vuelta, viene confirman-

do la intencion que tenia Barriga de acogerse al beneficio de la ley, y que no lo hizo fuera del término de la misma, por el temor que tenia que se le siguiera una causa de fuga que estaba pendiente.

En atencion á lo expuesto, y considerando que Barriga no fué aprehendido con las armas en la mano, así como el que en materia criminal toda interpretacion debe ser favorable al reo, y que aun respecto de los rebeldes que voluntariamente dejaron pasar á su perjuicio el término de la ley, el C. Presidente les proporcionó nuevos medios para obtener el indulto, segun se desprende de la circular de 24 de Agosto del año proximo pasado, el Promotor pide á V. por los fundamentos expuestos, se sirva decretar el sobreseimiento, quedando á salvo los derechos de tercero, por lo que toca á la responsabilidad civil. Morelia, Agosto 18 de 1873.—*N. Caballero.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Agosto 23 de 1873.—*Isidro Aleman.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Morelia, 20 de Agosto de 1873.—Vista esta causa instruida contra Apolonio Barriga, por el delito de rebelion; las diligencias del sumario; el cargo hecho al reo y sus respuestas; las pruebas promovidas por su defensor; lo alegado por este y pedido por el C. Promotor; la citacion para sentencia y cuanto mas convino.

Considerando: que el citado Apolonio Barriga está convicto y confeso, primero: de haberse rebelado contra la autoridad suprema en las dos asonadas que aparecieron en el Estado, una en el año de 1870 y la otra en el de 1872; segundo: de haberse apoderado de las personas de Lucas Sanchez, de Juan Torres y de un hijo de Rafael Gonzalez, privándolos de su libertad, al uno por cuatro y al otro ocho dias, cuyos hechos constituyen el delito de plagio segun la parte final de la fraccion primera del artículo